

En la sesión extraordinaria efectuada el once de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo mediante el cual se da respuesta al escrito presentado por el ciudadano Hipólito Arriaga Ponte en su carácter de Gobernador Indígena Nacional.

ANTECEDENTES:

Escrito recibido

I. El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se presentó ante este Instituto escrito signado por Hipólito Arriaga Ponte, en su carácter de “*Gobernador Indígena Nacional y representante de las sesenta y dos lenguas maternas*”, mediante el cual solicita el registro de indígenas para contender a cargos de elección popular en el Estado de Guanajuato, al cual anexa copia del acta constitutiva con número de escritura diecinueve mil novecientos cuarenta y uno, volumen trescientos cuarenta y cuatro, firmada ante la fe del Notario Público 126 del Estado de México.

CONSIDERANDO:

Atribuciones del Instituto

1. De conformidad con el párrafo segundo, del artículo 31, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la organización de las elecciones locales es una función estatal que se realizará a través del organismo público electoral local y por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley.

Personalidad y principios que rigen al IEEG

2. Los párrafos primero y segundo, del artículo 77, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establecen que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la ley electoral local. De igual manera, se señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo, se estipula que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en la materia electoral.

Órgano de dirección del IEEG

3. El artículo 81 de la ley electoral local, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado, al que corresponde

la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

Integración de dirección del IEEG

4.El párrafo primero, del artículo 82, del citado ordenamiento, indica que el Consejo General estará integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los institutos políticos con registro nacional y estatal, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.

Atribución del Consejo General

5. De conformidad con la fracción XXVI, del artículo 92 de la ley comicial local, es atribución del Consejo General atender las consultas que le sean planteadas sobre la aplicación e interpretación de la propia ley.

Reconocimiento constitucional a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas

6.El artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta

Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

[...]"

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Guanajuato establece en sus párrafos sexto al octavo del artículo primero, lo concerniente a los pueblos y comunidades indígenas:

“[...]

Son pueblos indígenas, aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio del País al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, las que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en el estado y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía, en los términos y condiciones que determine la Ley de la materia, tomando en cuenta los principios generales del artículo 2º de la Constitución Federal y criterios etnolingüísticos y de asentamientos físicos.

[...]

Reconocimiento legal a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Guanajuato

7. El ocho de abril de dos mil once se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato, donde se hizo un reconocimiento a aquellos pueblos y comunidades indígenas originarios del estado.

Adicional a lo anterior, el artículo 10 de la citada ley establece que el estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán a las autoridades indígenas elegidas de acuerdo a sus sistemas normativos internos, para el ejercicio de sus formas internas de gobierno; regular y solucionar sus problemas y conflictos, decidir sobre las faenas y en general, sobre todas las actividades de beneficio común.

Derivado de lo dispuesto en el apartado A, fracción VIII, del artículo 2 de la Constitución Federal, el artículo 12 de la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato, determina que los municipios con población indígena, los pueblos y las comunidades indígenas tendrán la facultad de elegir representantes ante el ayuntamiento respectivo.

Asimismo, señala que el ayuntamiento deberá notificar a la autoridad indígena, sobre la celebración de sesiones del ayuntamiento en las que se resuelvan asuntos que competan al pueblo o a la comunidad que aquella autoridad representa, con el fin de que ésta pueda participar, con voz, en defensa de los intereses de su pueblo o comunidad.

Escrito recibido

8. En su escrito, el ciudadano Hipólito Arriaga Ponte medularmente expresa:

[...]

En forma pacífica y respetuosa comparezco a Usted para entregar el registro de candidatos de elección popular de los candidatos indígenas para los cargos de elección popular para los cargos de Diputados Locales, así como de regidores, conforme a la elección del Estado de Guanajuato por usos y costumbres, conforme al cumplimiento del mandato establecido en el artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se aprueba la reforma al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [...]

[...]

A efecto de que este Instituto Nacional Electoral y el Instituto al que dignamente representa, defina de manera clara y precisa los mecanismos, lineamientos para el goce y ejercicio efectivo de los derechos político-electorales, de acceso a la representación política Estatal y municipal, de los Pueblos y Comunidades Indígenas en la entidad, en el cual en cada entidad federativa, a través de la Gubernatura Nacional Indígena, se ha definido a nivel local y representantes ante los Ayuntamientos, quienes ocuparán los cargos de elección popular para Diputados Locales, así como de regidores, conforme a la elección del Estado de Guanajuato [...]

[...]

Solicitamos el goce y ejercicio efectivo de los derechos político-electorales, de acceso a la representación política estatal, de los Pueblos y Comunidades Indígenas en la entidad. Definiendo y desarrollando las políticas Institucionales necesarias y la implementación de acciones pertinentes y oportunas, para asegurar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos político-electorales que son inherentes a los Pueblos y Comunidades Indígenas y que están expresamente reconocidos en los preceptos Constitucionales que se han citado; impidiendo de inmediato, que se continúe con la violación de nuestros derechos político-electorales individuales y colectivos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted Consejero Presidente Electoral, del INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, pido:

PRIMERO: Tenerme por presente con el escrito de mérito, en donde se registra los candidatos de elección para los cargos de Diputados Locales, así como de regidores, en donde además se anexa una caja donde se contiene cada uno de los documentos que acreditan los aspirantes de cargos de elección popular, credenciales de elector, curp, oficios de aspirantes Diputados Locales, regidores de cada municipio.

SEGUNDO: Girar sus apreciables instrucciones al Instituto Nacional Electoral, a efecto de que se haga de su conocimiento del registro de candidatos de Diputados Locales y de regidores según corresponda.

[...]”

Se anexan al escrito de mérito tres documentos, en los cuales se presenta la lista de candidaturas indígenas a diputados locales, regidores, y diputados federales,

adjuntándose las claves únicas del registro de población (CURP) y copias simples de las credenciales de votar de los ciudadanos que se pretende registrar.

Personalidad del Gobernador Nacional Indígena

9. En el presente caso, Hipólito Arriaga Ponte se auto reconoce como indígena y promueve en su carácter de *Gobernador Indígena Nacional y representante de las sesenta y dos lenguas maternas*, la solicitud de registro de candidaturas a diputaciones y regidores del Estado de Guanajuato.

De las constancias aportadas se tiene la existencia de un instrumento notarial en donde se observa su nombramiento como *Gobernador Indígena Nacional y representante de las sesenta y dos lenguas maternas*.

Lo anterior, conforme a la copia simple del acta notarial diecinueve mil novecientos cuarenta y uno, en donde el Notario Público ciento veintiséis en el Estado de México hace constar: *la protocolización de la convocatoria de Asamblea Nacional de los Jefes Supremos con Bastón de Mando, de las 26 entidades federativas que tiene la lengua madre y acta de asamblea nacional para la Constitución de la Gubernatura Indígena Nacional (del veintitrés de julio de dos mil catorce)*.

Conforme a ese documento, los participantes en la asamblea delegaron la responsabilidad de la gubernatura indígena nacional a favor de Hipólito Arriaga Ponte.

En el mismo contexto, del contenido de ese documento y de la solicitud de registro, en donde se prevé la defensa de los derechos indígenas, previstos en el artículo segundo de la Constitución Federal, se puede inferir su autorreconocimiento como indígena.

Asimismo, se reconoce su derecho de petición conforme a lo consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el derecho que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, organización o asociación para solicitar o reclamar algo ante las autoridades competentes.

Estudio de fondo

10. Con base en las manifestaciones asentadas es posible derivar lógica y jurídicamente, que el peticionario, en su calidad de indígena y ostentándose como *Gobernador Indígena Nacional y representante de las sesenta y dos lenguas maternas*, pretende que diversas personas accedan a la contienda electoral del primero de julio de dos mil dieciocho, registrando candidaturas tanto para dos diputaciones al Congreso del estado, como para treinta regidurías en ayuntamientos.

Sin embargo, esa pretensión no puede ser atendida por este Consejo General en atención a la vulneración que habría a los principios de certeza y legalidad.

Este Consejo General manifiesta su reconocimiento al contenido de la fracción III del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así

como a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 1 de la Constitución del Estado, sin embargo en el caso en concreto, es evidente que no se busca el registro de candidaturas para un pueblo o comunidad indígena en específico, sino para contender en dos distritos locales, sin especificar cuales, así como para diversas regidurías de los ayuntamientos del Estado de Guanajuato.

Esta hipótesis de registro no se encuentra prevista en ninguna normativa y por ende este Instituto está impedido para actuar conforme a lo solicitado, derivado de que la potestad de solicitar el registro de candidaturas corresponde a los partidos políticos y a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación electoral tanto nacional como local.

Lo contrario, violaría la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal como el artículo 17 de la local, lo cual traería como consecuencia la inobservancia del principio de exacta aplicación de la ley y de certeza.

Robustece lo anterior la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-AG-13/2015, promovido por Hipólito Arriaga Ponte, en el cual solicitaba al Instituto Nacional Electoral el registro de indígenas, sin cumplir las formas constitucionales, así como la creación de una sexta circunscripción plurinominal indígena:

“[...]”

Pues como se ha demostrado tal situación es inadmisibles, porque el derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas a elegir sus propias autoridades, se circunscribe al ámbito municipal.

En efecto con base en lo hasta aquí considerando, y el contexto constitucional vigente pueden obtenerse las siguientes puntualizaciones.

I. El derecho de los pueblos indígenas, específicamente en el aspecto del Derecho Electoral Indígena, se concibe en la Unidad Nacional, conjuntamente con los sistemas y las instituciones electorales vigentes actualmente.

II. Esto se desprende literalmente de lo que dispone el artículo 2º párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 2º.- *La Nación Mexicana es única e indivisible.*

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

Asimismo, en términos del Apartado A del citado artículo 2º, se determina que la Carta Magna reconoce y garantiza el Derecho de los Pueblos y Comunidades Indígenas y en consecuencia, a la autonomía para:

—Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

—Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados.

—Elegir en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, y en este aspecto, las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

—Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía, que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

III. *En términos del artículo 35, fracción II de la Constitución federal, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.*

Con lo referido en las puntualizaciones II y III, se aprecian las instituciones en que se sustenta la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos (entre ellos los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas) puedan acceder a ocupar cargos de elección popular.

Por un lado, se encuentra el subsistema de usos y costumbres, específicamente para el ámbito municipal; el subsistema de partidos políticos (que se desarrolla en el artículo 41 de la Constitución federal); así como el que corresponde a la institución de candidaturas independientes.

IV. *En términos del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pueblo mexicano se ha constituido en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de dicha Ley fundamental.*

Más aún, en términos del artículo 41 del citado cuerpo normativo fundamental, las constituciones de los Estados, en ningún caso, podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal, el cual se materializa precisamente con las disposiciones contenidas en la Carta Magna.

De esta manera, el sistema electoral mexicano (con los subsistemas apuntados) previsto constitucionalmente, establece los lineamientos que

deberán seguir en su normativa interna los Estados que integran la federación.

V. El artículo 41 del señalado cuerpo normativo fundamental establece literalmente, que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y conforme a las bases que desarrolla, se observa la implementación de los subsistemas correspondientes a los partidos políticos y a la institución de las candidaturas independientes; en donde tiene importancia relevante el Instituto Nacional Electoral, como el encargado de organizar las elecciones, conjuntamente con los organismos públicos locales (a éstos corresponde la organización de las elecciones en las entidades federativas, conforme a los lineamientos de la propia Constitución y de las Leyes aplicables).

[...]

VII. Por último es en el artículo 115, fracción III, último párrafo de la Constitución federal, en donde se prevé literalmente, que las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la Ley.

VIII. [...]

Pues como se ha visto, sus derechos fundamentales de autoorganización y autodeterminación, así como la facultad para elegir a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, tienen materialización en el ámbito municipal, ya que así fue acordado en el Pacto Federal y dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[...]"

De la referida sentencia se advierte que se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, siempre y cuando se respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

En el caso concreto no se trata de una solicitud para registrar candidaturas a una elección mediante el sistema de usos y costumbres, sino que se pretende acceder a cargos de elección popular ordinarios mediante dicho sistema, hipótesis que no se encuentra prevista en ninguna normativa.

Es por ello, que la forma de acceder a los puestos de elección popular en el Estado de Guanajuato es única y exclusivamente mediante las formas previstas en el artículo 17 de la Constitución del Estado.

Es importante recalcar que no se intenta en modo alguno limitar los derechos político-electorales de los ciudadanos que integran pueblos o comunidades

indígenas en el Estado de Guanajuato, que pretenden ser registrados como candidatos, sin embargo, es necesario cumplir con los procesos y formas establecidos para poder contender a un cargo de la naturaleza que desean.

Se reitera que la legislación electoral del Estado de Guanajuato no prevé la elección por usos y costumbres, ni da tratamiento especial a los pueblos y comunidades indígenas para acceder a cargos de elección popular, por lo tanto, es inatendible la solicitud.

No se puede omitir que el actual reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito municipal se encuentra en la *Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas* donde se establece que los municipios con población indígena tendrán la facultad de elegir representantes ante el ayuntamiento respectivo sin embargo esto no significa de modo alguno que *de facto* puedan acceder a puestos de elección popular por medio de regidurías, y por lo tanto existe una imposibilidad jurídica para ser registrado como candidata o candidato en los términos planteados por el peticionario.

Finalmente, respecto a la lista que pretende registrar candidaturas a diputados federales, lo pertinente es remitir copia certificada de dicho escrito al Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 17, 31, párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 77, párrafos primero y segundo, 81, 82, párrafo primero y 92, fracciones XXIV y XXV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. En los términos establecidos en el considerando décimo se da respuesta al escrito presentado por el ciudadano Hipólito Arriaga Ponte en su carácter de Gobernador Indígena Nacional.

SEGUNDO. Notifíquese personalmente al peticionario a través de la persona autorizada para recibir notificaciones en el Estado de Guanajuato.

TERCERO. Remítase copia certificada del presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo Local en el Estado de Guanajuato.

CUARTO. Hágase la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, firman este acuerdo el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Secretaria Ejecutiva del mismo.